

Medellín, diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	DECLARATIVO - SERVIDUMBRE
Radicado	05001 31 03 012 2021 00138 01
Demandante	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Demandada	ARMANDO DE JESÚS GNECCO VEGA Y OTRO
Juzgado origen	DOCE CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta por el demandado Armando de Jesús Gnecco Vega, frente al auto del 8 de noviembre de 2022, mediante el cual se decretó el desistimiento tácito a la oposición formulada frente a la indemnización de perjuicios.

1. ANTECEDENTES.

La parte demandante promovió demanda declarativa de imposición de servidumbre en contra de la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. y Armando de Jesús Gnecco Vega ¹, la cual se admitió mediante auto del 30 de abril de 2021².

El demandado Armando de Jesús Gnecco Vega contestó la demanda con objeción frente al estimativo de perjuicios realizado por la parte actora³, por ende, mediante auto del 25 de julio de 2022, el Juzgado nombró dos peritos para que efectuaran el avalúo correspondiente y requirió al demandado para que gestionara la notificación de los auxiliares de la justicia, so pena de aplicar desistimiento tácito⁴ y, el 11 de agosto siguiente se posesionó uno de los peritos designados.

Por auto del 20 de septiembre de 2022, el juzgado requirió al opositor para que, en el término de 30 días, realizara las gestiones tendientes a lograr la notificación del segundo perito, so pena de aplicar desistimiento

¹ Ver carpeta 01PrimeraInstancia / archivo 03 Demanda

² Ibíd. archivo 06 AdmiteDemanda202100138

³ Ibíd. archivo 32. ContestaciónArmando

⁴ Ibíd. archivo 48AutoNombraPeritoRequiere 2021_138

tácito de la objeción, de conformidad con lo prescrito en el artículo 317 del CGP⁵.

A continuación, el apoderado demandante elevó solicitud de expedir despacho comisorio para la realización de inspección judicial sobre el predio sirviente, diligencia que se realizó el 28 de octubre de 2022 y que se puso en conocimiento del juzgado de conocimiento en igual fecha⁶.

Mediante proveído del 8 de noviembre de 2022, el Juzgado decidió decretar el desistimiento tácito de la oposición a la indemnización de perjuicios formulada por el demandado Armando de Jesús Gnecco Vega, argumentando que el opositor no cumplió con la carga procesal requerida dentro del término concedido⁷.

2. LA APELACIÓN.

La decisión fue controvertida vía recurso de reposición y en subsidio apelación por el apoderado del demandado Armando de Jesús Gnecco Vega.

Manifestó el recurrente que sí realizó las gestiones de notificación al perito, pues envió correos electrónicos el 8 de agosto, 9 y 21 de septiembre de 2022 y realizó varias llamadas, pero que este no aceptó el encargo conforme respuesta que brindó por correo electrónico el 21 de septiembre. Gestiones que, sumadas al pago de honorarios efectuado al perito posesionado mostraban diligencia de su parte.

Agregó que se presentó una situación de fuerza mayor relacionada con su estado de salud, como quiera que, padece una afección cardiaca desde el año 2021, fue internado el 12 de octubre de 2022 por dolor torácico y antecedentes de ectasia coronaria con alto riesgo de infarto agudo al miocardio. Cuadro clínico que generó como recomendaciones médicas evitar estrés emocional o físico que pudiesen desencadenar un infarto al

⁵ Ibid. archivo 58 *AutoOrdenaInspeccionRequiereDesistimiento 2021_138 (1)*

⁶ Ibid. archivo 65 *ActaInspeccion_2021_00138(vero)*

⁷ Ibid. archivo 67 *AutoTerminaDesistimientoOposicion 2021_138*

miocardio, además, de la prescripción de una incapacidad por 25 días que culminó el 5 de noviembre de 2022.

Concluyó que la hospitalización e incapacidad médica son situaciones imprevisibles e irresistibles que le impidieron seguir desarrollando sus labores profesionales, en especial, aportar en tiempo el acuse de recibo del correo electrónico enviado al perito.

Del recurso se corrió traslado, en la debida oportunidad se pronunció la parte demandante, quien estimó que debe mantenerse la decisión porque el despacho requirió en dos oportunidades al demandado para que aportara la constancia de notificación al perito, pero desatendió los llamados del despacho y acudió al proceso luego de decretarse el desistimiento y, que la enfermedad padecida por el apoderado no puede fungir como un pretexto para que desobedezca e ignore las decisiones judiciales, las cuales, fueron proferidas con mucha antelación a las incapacidades médicas⁸.

El Juzgado decidió no reponer la decisión tras concluir que la afectación de salud del apoderado no constituyó caso fortuito o fuerza mayor, pues el cumplimiento de la carga procesal no ponía en peligro su vida, ni su estado de salud, no se encontraba hospitalizado, tampoco requería desplazamiento físico, por cuanto la obligación se reducía al envío de un correo electrónico.

Añadió que, si bien la historia clínica, alta y diagnóstico fueron generados el 12 de octubre de 2022, no ocurrió lo mismo con la incapacidad que se elaboró el 11 de noviembre de 2022, esto es, cuando ya se había decretado el desistimiento tácito.

Por lo anterior, decidió mantenerse en su decisión, conceder la apelación en el efecto devolutivo y ordenó la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente⁹.

⁸ Ibíd. archivo 77 *PronunciamentoRecurso_2021_00138(vero)*

⁹ Ibíd. archivo 78 *AutoNoReponeCondeceApelacion 2021_138*

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, encontrándose el presente asunto previsto en el literal e) del numeral 2 del artículo 317.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si se cumplieron los presupuestos para decretar el desistimiento tácito de la oposición al estimativo de perjuicios formulada por el demandado Armando de Jesús Gnecco Vega.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Desistimiento Tácito (Normatividad y jurisprudencia).

El numeral primero del artículo 317 del CGP dispone que el desistimiento tácito se aplicará, entre otros casos, cuando para continuar con el trámite de cualquier actuación promovida a instancia de parte, se requiera que esta cumpla una carga procesal. En dichos eventos el juez ordenará cumplirlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la providencia que así disponga y, de no realizarse, se tendrá por desistida tácitamente la actuación.

Así mismo, en los términos del inciso tercero del numeral primero de la norma citada, el juez no podrá requerir a la parte para que inicie las diligencias tendientes a obtener la notificación personal de la parte demandada, en el evento en que estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir medidas cautelares.

Con relación al propósito de la figura del desistimiento tácito, la Corte Constitucional explicó:

“El desistimiento tácito, en criterio de la Sala, cumple dos tipos de funciones (supra num. 5.1): de un lado, sancionar la negligencia, omisión o descuido de la parte demandante y contribuir a conseguir una tutela judicial efectiva. De otro lado, garantizar el derecho de acceder a una administración de justicia diligente, celer, eficaz y eficiente; el derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia; la certeza jurídica; la descongestión y racionalización del trabajo judicial y la solución oportuna de los conflictos¹⁰. Con relación a las primeras, como lo recuerda el Ministerio Público, la finalidad de la disposición demandada es obtener el cumplimiento del deber constitucional de “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (artículo 95.7 C.P.). Con relación a las segundas, tales finalidades, para la Sala, son legítimas y, además, imperiosas a la luz de la Constitución, primero, porque no están prohibidas explícita o implícitamente por la Carta y, segundo, porque lo que persiguen es la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de los usuarios de la justicia, la cual encuentra respaldo en los principios antes referidos (...)”¹¹.

Es importante advertir que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, unificó jurisprudencia respecto de lo previsto en el literal c) que antecede y explicó que el término “cualquier actuación” no se debe interpretar exclusivamente en su literalidad, ya que la interpretación debe ser sistemática y por ello la actuación desplegada para que interrumpa el término previsto en la norma es aquella que guarde relación con la carga requerida o que sea suficiente, idónea y apropiada para el impulso del trámite, así se le da sentido útil y eficaz a la directriz.¹²

¹⁰ Sentencia C-1186 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa - Corte Constitucional.

¹¹ Sentencia C-173 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido - Corte Constitucional.

¹² Ver STC11191-2020 del 9 de diciembre de 2020 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

3.4 CASO CONCRETO.

De los fundamentos jurídicos expuestos, se deduce que el desistimiento tácito fue instituido en nuestro ordenamiento procesal con el objeto de garantizar los principios de celeridad, economía y tutela judicial efectiva y que tiene como presupuesto que las partes cumplan sus cargas dentro de los términos previstos, a fin de evitar que el procedimiento se prolongue en el tiempo por falta de una actuación que le es atribuible y es por eso que su inobservancia implica como consecuencia adversa la aplicación de la figura.

De las varias hipótesis que pueden configurar esta consecuencia, la instituida en el numeral 1 del artículo 317 requiere del juez una advertencia previa para la decisión.

En el caso concreto, se encuentra acreditado que, mediante auto del 20 de septiembre de 2022, el juzgado requirió al demandado Armando de Jesús Gnecco Vega para que, en el término de 30 días gestionara la notificación del perito Ariel Armando Llano Medina, gestión que no acreditó y generó como consecuencia la aplicación del desistimiento tácito a la oposición al estimativo de perjuicios, conforme se expuso en auto del 8 de noviembre del mismo año.

El apoderado del demandado reprochó la decisión del *a quo* por estimar que sí realizó las gestiones de notificación encomendadas. Además, llamó la atención sobre un caso que consideró de fuerza mayor con ocasión del estado de salud que padeció durante el término del requerimiento, en concreto, un dolor torácico que generó su asistencia a una institución hospitalaria, una incapacidad por 25 días e indicaciones médicas de evitar estrés emocional o físico, situaciones que, a su juicio, le impidieron desarrollar las labores profesionales.

El padecimiento de salud del apoderado tiene respaldo en la historia clínica aportada, la cual da cuenta del ingreso del apoderado el día 12 de octubre de 2022 al servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San Jerónimo de

Montería por *“dolor torácico agudo tipo angor”*, con diagnóstico, análisis y plan médico de: *“angina inestable de bajo riesgo con ectasia coronaria por antecedentes de angiografía coronaria (...) se decide dar de alta con ergometría ambulatoria”* y como indicaciones del médico tratante: *“reposo relativo sin actividad física vigorosa ni estrés emocional, ambiente tranquilo con adecuado núcleo familiar”*¹³. Adicionalmente, presentó el recurrente una incapacidad médica formulada por un término de 25 días en el periodo comprendido entre el 12 de octubre y el 5 de noviembre de 2022¹⁴.

El escenario descrito abastece los presupuestos establecidos en el numeral 2 del artículo 159 del CGP para que se estructure la interrupción del proceso, a partir de la enfermedad grave del apoderado judicial del codemandado¹⁵, por cuanto, se acreditó la presencia de una enfermedad física que requirió no solo la asistencia al servicio de urgencias, sino también la realización de exámenes, la prescripción de un tratamiento y de recomendaciones médicas dirigidas al reposo, evitar situaciones de estrés y mantener un ambiente tranquilo e incluso la prescripción de una considerable incapacidad de 25 días. Tales circunstancias denotan la gravedad de la enfermedad sufrida por el vocero judicial que le impidieron ejercer con normalidad su actividad profesional.

Y si bien la *a quo* estimó que existía falta de idoneidad en la incapacidad aportada por tener una fecha de expedición del 11 de noviembre de 2022, momento para el cual ya se había decretado el desistimiento tácito, lo cierto es que la fecha de inicio de la incapacidad correspondió al 12 de octubre del mismo año, la cual coincide con el servicio de urgencias al que acudió el vocero judicial, luego, no se comparte el argumento del Juzgado,

¹³ *Ibíd.* archivo 68 ReposicionApelacion_2021_00138(vero) página 7

¹⁴ *Ibíd.* página 6

¹⁵ Dispone la norma: ARTÍCULO 159. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá: (...)

“por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos”.

máxime cuando no se cuenta con elementos científicos adicionales que desvanezcan los criterios médicos plasmados en la historia clínica presentada por el mandatario.

En esa línea, la interrupción operó desde el 12 de octubre de 2022, fecha a partir de la cual se determinó el padecimiento del apoderado, como quiera que, según la constancia secretarial contenida en el auto que declaró el desistimiento, el expediente ingresó a despacho el 8 de noviembre de 2022, por ende, la interrupción inicia desde el hecho que la originó, conforme lo prescribe el inciso final del artículo 159¹⁶.

Emerge de lo anterior que el proceso se interrumpió desde el 12 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2022, por consiguiente, no podía darse aplicación al desistimiento tácito el 8 de noviembre siguiente, como quiera que la circunstancia en comento implicó la interrupción y el comienzo de una nueva contabilización de términos, siendo evidente que, para la fecha del auto que determinó el desistimiento tácito no había transcurrido a plenitud el plazo que indica el artículo 317. Razón suficiente para revocar la providencia recurrida.

Sin perjuicio de ello, resulta trascendente advertir que, la diligencia del 28 de octubre de 2022¹⁷, si bien no guarda relación con la carga procesal objeto de requerimiento, no es una actuación trivial, por el contrario, es idónea de cara al impulso procesal y en ese sentido, se considera apta para interrumpir los plazos del desistimiento.

En definitiva, el padecimiento de salud acaecido al apoderado del demandado Armando de Jesús Gnecco Vega configuró la interrupción del proceso, lo que supuso una nueva contabilización de términos que impedía la aplicación del desistimiento tácito para el 8 de noviembre de 2022. Motivo suficiente para revocar la decisión apelada.

¹⁶ Indica la norma:

"La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento".

¹⁷ Ibid. archivo 65 ActaInspeccion_2021_00138(vero)

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: REVOCAR el auto del 8 de noviembre de 2022, mediante el cual se decretó el desistimiento tácito de la oposición formulada frente a la indemnización de perjuicios, por lo expuesto.

SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

TERCERO: REMITIR el expediente al juzgado de origen para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado